

ARTICULOS

LAS ELECCIONES DEL 31 DE MARZO

Segundo Montes

RESUMEN

Las últimas elecciones completaban el ciclo de consultas populares a través del voto, y durante los próximos tres años no se volverá a ir a las urnas, con lo cual el régimen salvadoreño tendrá un período de ejecución de sus planes administrativos. En la introducción al artículo se presenta el alcance de estas elecciones, así como sus limitaciones. A continuación el autor analiza las distintas fases por las que ha ido pasando el proceso electoral. Primero la polarización de fuerzas políticas, con los conflictos incluso legales que enfrentaron a la democracia cristiana con la oposición, principalmente en el problema de la ley electoral y el veto presidencial, lo cual se reflejó en la campaña política. En segundo lugar, ofrece una interpretación de las previsiones inmediatas a la votación, discutiendo la probabilidad de la supuesta posición norteamericana en cuanto a un equilibrio de fuerzas similar al que prevalecía y el comportamiento de las diversas fuerzas. En la tercera parte, intenta analizar las causas posibles de los resultados electorales que sorprendieron a todos los partidos y analistas, mostrando quiénes fueron los ganadores y perdedores, en qué grado, y por qué razones. Los problemas suscitados a consecuencia de esos mismos resultados, principalmente por el pedido de nulidad y la declaración de la más alta instancia militar, ocupa el cuarto apartado. Finalmente, se retoman los elementos más importantes analizados en el artículo, para proyectar provisoriamente el futuro político y social del país durante el trienio que comienza.

Con las elecciones del 31 de marzo de 1985 se cierra un período de irregularidad, retornando totalmente a la estructura democrática de asignación del poder legitimado por el voto directo de los electores. Las elecciones de 1982 terminaron

con los gobiernos de facto surgidos del golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, al escoger el pueblo a sus representantes a la asamblea constituyente, quienes primero encomendaron el poder ejecutivo a un presidente provisional, elaboraron

luego una nueva constitución política, aprobada a finales de 1983, convocaron a elecciones presidenciales directas y se constituyeron en diputados de la asamblea legislativa hasta las elecciones de 1985. El 6 de mayo de 1984 resultó elegido Duarte como presidente constitucional, en una segunda ronda, dado que el 25 de marzo de ese mismo año ninguno de los candidatos logró la mayoría absoluta de votos. Únicamente restaba elegir por voto a los nuevos diputados y a los concejos municipales, estos últimos hasta el momento ocupaban sus cargos como resultado de un acuerdo político entre el presidente Magaña y los principales partidos, sancionado en el "Pacto de Apacena."

El primer año del gobierno de Duarte transcurrió en una situación jurídicamente anómala y políticamente atípica. Los diputados habían sido elegidos específicamente para elaborar una nueva constitución política; una vez aprobada, lo normal hubiera sido que se disolviera la asamblea y se convocaran elecciones generales. Sin embargo, la máxima autoridad de la república, la asamblea constituyente, por mayoría de votos decidió convocar sólo a elecciones presidenciales convirtiéndose así en asamblea legislativa postergando las elecciones de diputados y alcaldes para un año más tarde. Por otro lado, el ejecutivo se encontraba con una situación políticamente atípica en El Salvador: una Asamblea controlada por los partidos de oposición y unas alcaldías ocupadas por partidos que no siempre representaban la mayoría de los votos locales y que, en su conjunto, correspondían también a una proporción opositora superior a los resultados electorales de 1984.

Si bien es cierto que el régimen político salvadoreño tradicionalmente es de corte presidencialista, tanto más cuando la asamblea está controlada por el mismo partido que ocupa el ejecutivo y que los gobiernos locales (alcaldías) tienen poco margen de poder y están muy controlados económica y políticamente por el ejecutivo, a través del ministerio del interior y de sus gobernadores departamentales, cada una de las dos instancias goza de cierta autonomía. La asamblea puede obstaculizar la gestión ejecutiva y controlar el órgano judicial y las alcaldías pueden constituirse en bases sociales y políticas con cierta capacidad de resistencia —o apoyo— al poder ejecutivo. De todos modos, el proceso democrático no se completó hasta que, tanto los diputados como los concejos municipales, no

fueron elegidos por voto directo.

Las elecciones de 1985, por consiguiente, revestían cierta importancia —por secundaria no menos relevante— tanto dentro del marco jurídico como del político. En primer lugar era la primera prueba a la que el partido en el gobierno se sometía, para que el pueblo manifestara el grado de satisfacción por su gestión administrativa. En segundo lugar, se constituía en un sondeo para medir la consistencia o volubilidad del voto un año más tarde. En tercer lugar, además de completar el proceso democrático, se consultaría al pueblo sobre su preferencia: un ejecutivo fortalecido en los demás órganos e instancias de poder para realizar sus planes y programas de gobierno o un ejecutivo controlado y neutralizado por una oposición que obligara a compromisos políticos o que paralizara cualquier intento de cambios importantes. Estas elecciones tenían, pues, un doble significado. Por un lado se convertían en un instrumento evaluador de la consistencia de los partidos políticos —y con mayor razón de los minoritarios que no participaron en la segunda ronda de 1984—, de su trabajo al interior de los mismos, con sus bases y con el pueblo en general; por otro lado, dado que en los próximos tres años no se realizará ningún tipo de elección, las de 1985 reflejan la actual composición y correlación de fuerzas, elemento fundamental para establecer los pactos y las reglas del juego político, al mismo tiempo que constituyen bases de acción partidaria —o de reestructuración— para una contienda electoral todavía lejana.

Estas elecciones, por tanto, encerraban una doble dimensión y significado: la redistribución de la cuota de poder asignada a la instancia política y los criterios para evaluar el trabajo partidario así como las líneas de acción proselitista para el futuro. Una vez establecidos estos preámbulos, trataremos de analizar a continuación los antecedentes de la elección, los condicionantes inmediatos de la misma, los resultados de la votación, los incidentes postelectorales, para terminar con un análisis complejo y previsorio.

Antecedentes de la elección

Los antecedentes de las elecciones de 1985 respondían a la percepción que los partidos tenían de la correlación de fuerzas. En la votación de mayo de 1984 el PDC había logrado una magra mayoría, la cual pudiera haberse visto debilitada

El sentido de la campaña electoral fue destructivo, dirigido a destruir al adversario y sin plantear los grandes problemas nacionales y mucho menos ofreciendo alternativas reales.

si el PCN hubiera ordenado votar contra la democracia cristiana, en vez de haber dejado en libertad a sus seguidores. El desgaste propio del ejercicio del poder, los diversos tropiezos del ejecutivo frente a la asamblea y a los intereses populares —veto a la ley electoral y el consiguiente conflicto de poderes, veto a la ley prohibitoria de despidos, veto a la ley de cooperativas— podrían contrapesar el incremento de votos del partido en el gobierno por el hecho de detentarlo y utilizar recursos materiales y propagandísticos a su favor. Los partidos de derecha, por lo tanto, así como las fuerzas económicas y sociales que están detrás de ellos, utilizaron todos los mecanismos políticos a su disposición para conservar —e incluso incrementar si era posible— la presente correlación de fuerzas y distribución del poder, que de momento les era favorable, para impedir que el partido en el gobierno atentase a sus intereses, ya sea en el campo económico (reformas), ya sea en el político (diálogo con el FMLN-FDR).

Desde esta perspectiva, pienso, se deben analizar los contratiempos surgidos antes de las elecciones, ya desde un primer momento. Ni se trata de una confabulación o enfrentamiento de todos los partidos políticos contra el PDC —al menos AD, PPS, MERECEN, POP, y PAR no entraron en alianza explícita—, ni de una posible escisión frente al FMLN-FDR entre la democracia cristiana por un lado y ARENA-PCN-PAISA, por el otro —como se vio en Ayagualo y en las declaraciones presidenciales y del alto mando militar, las cuales mostraban la unidad fundamental de todos frente al enemigo común—, ni tampoco de personalismos intrascendentes —en caso del hijo de Duarte candidato a la alcaldía metropolitana. Era más bien una estrategia política que perseguía debilitar al partido y la figura del presidente, en la cual se centraba la propaganda política del PDC, a fin de neutralizar las posibles conquistas de votantes valiéndose del aparato gubernamental, con lo que cuando menos se mantendría la presente correlación de fuerzas en los organismos sometidos a votación, o se impediría un incremento que favoreciera al PDC. En ese sentido se puede entender tanto el problema del veto a la ley electoral, el consiguiente enfrentamiento de poderes y la desautorización de la acción de Duarte, como

la reducción del presupuesto controlado por el ejecutivo para potenciar su base política, como también las leyes de prohibición de despido o de cooperativas, cuyos vetos presidenciales minaron la imagen popular de Duarte. La coalición tripartita intentó conquistar un baluarte democristiano, la alcaldía de San Salvador. Tras la frustración de la candidatura del hijo de Duarte, se unieron ARENA, PCN y PAISA con el posible arrastre que en la capital pudiera tener la imagen de la Dra. Castillo. En el resto del país, en cambio, se unieron los dos partidos que podían reunir más base electoral, ARENA y PCN, instrumentalizando la ambigüedad que pudiera significar el que cada uno de ellos conservara los símbolos propios, pero sumando los votos de ambos, con lo cual no sólo se mediría la base de cada uno de ellos, sino que también se pretendía retener los votos de los disconformes con la coalición, pero que se mantendrían leales a su propio partido.

La campaña electoral confirmó la hipótesis que se viene sosteniendo. La democracia cristiana montó su campaña en torno a la figura del presidente Duarte, pasando prácticamente desapercibidos los verdaderos candidatos; la melodía principal, matizada con distintos acompañamientos, consistió en presentarlo como el mejor gobernante, incapaz de cumplir su cometido y traer la paz y bienestar por el obstáculo de una oposición mayoritaria entorpecedora, por lo tanto se pidió apoyo masivo y mayoritario para gobernar en bien del pueblo. La oposición, por el contrario, dirigió sus baterías contra Duarte y su gobierno, contra el partido y su maquinaria —la “dictadura verde”—, más que contra personas concretas —no se recurrió a los ya consabidos insultos y acusaciones contra el candidato a alcalde de San Salvador, Morales Ehrlich—, con el objetivo de debilitar al partido de gobierno y a su dirigente. Utilizó a su vez figuras de posible arrastre popular, quienes sí eran candidatos elegibles. El sentido de la campaña, por tanto, fue destructivo, de minado y desprestigio del adversario, sin plantear los graves problemas nacionales, mucho menos ofreciendo alternativas o soluciones, a no ser en forma genérica. El tema del diálogo no fue abordado, sino en las postrimerías de la campaña por Duarte y Rey Prendes, quienes prometieron reanudarlo cualquiera que fuere el resultado de



las elecciones. Esto pudo haber incidido en los votantes a favor del PDC. Es probable, por otro lado, que los partidos hayan acordado no utilizar el tema como bandera política a favor o en contra. Hubo un primer enfrentamiento en torno a un avión cargado de dólares, lo cual motivó una áspera polémica de acusaciones y descargos. El asunto pronto pasó al desván de los recuerdos, posiblemente bajo presión o acuerdo; pero el hecho en sí pudiera haber restado pingües recursos económicos que posiblemente hubieran sustentado una campaña distinta.

De hecho, la campaña proselitista no despertó interés y apasionamiento en el público, el cual se mostraba hastiado y aburrido. Los partidos centraron su atención en los medios de comunicación de masas, dando escaso margen a las concentraciones públicas. Algo extraordinario fue el mitin con el que finalizó su campaña el PDC en el parque Libertad de San Salvador, logrando concentrar multitudes que hacía tiempo no se reunían y demostrando la capacidad organizativa de su aparato partidario, posible augu-

rio de lo que sucedería en las urnas. El problema no era la carencia de planes o alternativas globales de parte de la oposición; no era la presidencia la que estaba en juego, y en un régimen presidencialista a la asamblea le compete poco más que fomentar, frenar o interpelar las acciones del ejecutivo; en cuanto a las alcaldías, los problemas y soluciones se ventilan a un nivel local, no nacional.

Condicionantes inmediatos de las elecciones

Mucho se ha aludido, nacional e internacionalmente, a una supuesta preferencia de la administración Reagan por mantener un equilibrio de fuerzas políticas en El Salvador, similar al que prevalecía antes del 31 de marzo de 1985. Según dicha tesis, una mayoría democristiana en la asamblea podría desestabilizar el proceso, ya fuera porque el gobierno intentara cambios que no parecen de momento tolerables —entre los cuales sobresaldrían el diálogo con el FMLN-FDR, así como un posible cambio de la constitución para viabilizar el regreso a los límites primeros de la tenencia de la tierra en orden a aplicar la segunda fase de la reforma agraria—, ya fuera porque la derecha, privada de una cuota aceptable de poder político, pudiera derivar hacia comportamientos golpistas o violentos. Sin embargo, los hechos no parecen confirmar esta tesis. Todo parece indicar más bien que Estados Unidos persigue la ampliación del “centro político,” aislando o debilitando a las extremas.

En primer lugar, el PCN es una fuerza en progresivo declive económico, político y social. Mientras estuvo en el poder se amparaban en él las fuerzas económicas, las cuales lo consideraban el mejor instrumento político para defender sus intereses; los fondos con que contaba se fueron consumiendo en las sucesivas campañas y al no contar con el respaldo del capital, se presentó a las elecciones sin recursos financieros, lo cual le obligó a buscar alianzas; el repudio del PDC para integrar una coalición, lo arrojó en los brazos de ARENA, con el cual se unió tácticamente, en el entendido de recobrar la autonomía después del evento electoral. Políticamente el PCN ha sufrido profundas crisis de supervivencia y de identidad: logró sobrevivir el 15 de octubre, pero ya como partido de oposición minoritario; obtuvo cierto éxito en las elecciones de 1982, pero inmediatamente se escindió, una mayoría de sus diputados conformaron PAISA,

un partido más cercano a ARENA; la nueva línea del partido, la imagen que trató de proyectar con un civil y una ideología más abierta, lo llevó a recuperar una sustancial cuota de electores en la primera ronda presidencial de 1984, pero éstos tuvieron que desidentificarse y optar por otro candidato en mayo del mismo año. Socialmente, en fin, sus bases han ido desapareciendo, no sólo por las crisis políticas e ideológicas internas, las divisiones y las pérdidas de identidad, sino por haber perdido muchos de sus cuadros inferiores y de la infraestructura que le suponía ORDEN y otras instancias en todo el país. La coalición de ARENA con el PCN, por sí misma, no podía predecir, por tanto, la obtención de una mayoría de diputados, sino, a lo más, una proporción de votos similar a la de mayo de 1984, con la variante de que la distribución por departamentos pudiera beneficiar en algo a la coalición; por otro lado no se podía esperar que PAISA incrementara sustancialmente su clientela política sobre la obtenida en 1984, a costa del PDC. La campaña política del PCN mostraba tanto su carencia de fondos sustanciosos como la subordinación al partido hegemónico del pacto. Por último, parece ser que ya desde antes de las elecciones había algún tipo de compromiso o entendimiento para que el PCN, así como AD, colaboraran o tuvieran cierta participación en el gobierno ulterior a la contienda, ampliando un centro democrático sin exasperar a las extremas.

Por otro lado, un par de acontecimientos parecen también contradecir la tesis inicial. El caso del avión con los dólares y su conexión con miembros de ARENA, indudablemente, fue descubierto por agencias norteamericanas, y la noticia así como su instrumentalización política estuvieron relacionadas con la administración Reagan, lo cual iba en claro perjuicio, no sólo económico, sino también político y social, de dicho partido. Igualmente, y en condiciones similares a las del año anterior, en vísperas de las elecciones se obtuvo y difundió de nuevo una entrevista con el coronel retirado Santibáñez, en la cual inculpó a miembros pertenecientes o muy próximos a ARENA. Todo esto estaba orientado para incluir decisivamente en la conciencia de los votantes.

Estos hechos no concuerdan con la susodicha tesis, sino más bien sustentan la contraria. En cualquier caso, el gobierno de Estados Unidos tiene capacidad de maniobra suficiente como para adaptarse a cualquier correlación de fuerzas

políticas en El Salvador, dentro del actual esquema, lo cual no quita el que le sea más fácil con una que con otra. Pero la administración Reagan no tiene a "la dictadura verde," pues cuenta con ilimitados recursos y mecanismos de presión para que no sean lesionados sus intereses. Fueron las fuerzas que sustentan los partidos de derecha, las que vieron amenazados sus privilegios con el triunfo de un partido reformista. Para ellos el PDC es una "dictadura verde," peligrosa en sí misma.

Otro elemento digno de tomarse en consideración fue la reestructuración del proceso electoral. En 1984 se establecieron mecanismos para que toda la población pudiera emitir su voto, se ubicaron urnas regionales, departamentales y nacionales para todos aquellos que no podían votar en las municipales, ya fuera por ser desplazados o por encontrarse lejos del municipio donde estaban inscritos. Ahora, en cambio, sólo se pudo votar en el municipio de inscripción, a pesar de que el problema de los desplazados sigue igual, si es que no ha aumentado en el último año. El artículo pertinente de la ley electoral no fue vetado por Duarte, lo cual muestra que el PDC aceptó el cambio. Quizás porque no preveía que le afectase en los resultados, o porque no le dio importancia, a pesar de que en la campaña uno de los argumentos usados fue que el gobierno estaba dando asistencia a medio millón de desplazados.

La sustentación lógica del cambio era razonable: en 1984 se trataba de elegir por voto directo de todos los ciudadanos al presidente y al vicepresidente, siendo indiferente el lugar de residencia de los votantes; en cambio, en 1985 se trataba de elegir a los concejos municipales y a los diputados departamentales. No parece justo que personas que viven fuera de las demarcaciones correspondientes decidan quiénes han de gobernar o representar a quienes residen en los lugares en cuestión. Ciertamente el argumento tiene un fuerte valor probatorio, tanto más cuanto que el problema de los desplazados no parece que se pueda resolver en un futuro inmediato.

Sin embargo, pudiera ser que hubiera otros intereses, en detrimento del PDC. En el Cuadro I tenemos los resultados electorales del 6 de mayo de 1984, por partidos y departamentos, correspondientes a la población que votó fuera de sus respectivos municipios; el total es un número significativo, ya que representa el 9.81 por ciento de todos los votos válidos emitidos. Ahora bien, el saldo global favorece al PDC en unas circunstan-

cias desventajosas respecto a las de 1985, cuando el PDC es el partido "oficial," que distribuye la ayuda a los desplazados, que ha logrado remover a algunos comandantes acusados en las elecciones pasadas de favorecer a la oposición, principalmente en los departamentos más conflictivos. Si en alguno de los siete departamentos donde ARENA obtuvo mayoría (los marcados con asterisco), el PDC lograba recuperar ventaja, en base a las nuevas condiciones imperantes, el balance a su favor sería aún mayor; por lo tanto, la reestructuración de la forma de votar a quien más perjudicaría sería al PDC. No hay evidencia alguna de que esta reflexión haya sido tomada intencionalmente en cuenta en la nueva ley electoral, pero es un factor real que incidió en los resultados.

Un aspecto más hay que analizar en este proceso previo, el comportamiento de la institución armada. Para asegurar el proceso electoral el alto mando organizó la "operación libertad," dirigida a lograr el mayor control posible del territorio nacional, impedir las acciones militares de la guerrilla tanto en días previos como en el propio del sufragio, y mantener dominada la si-

tuación militarmente en los días ulteriores. Si voceros de los frentes, especialmente de la rama política, habían desautorizado las elecciones como solución a la problemática nacional, dando a entender que la irrelevancia del evento no motivaba acciones especiales para impedirlo, de hecho, la guerrilla montó una serie de acciones encaminadas a destruir alcaldías por varios puntos del país, especialmente en el oriente, no tanto para impedir las elecciones por la destrucción de documentos y archivos ya duplicados en el registro del CCE, cuanto para hacer notar su presencia y capacidad militar, incluso frente al operativo destinado a garantizar las elecciones. Estas actitudes no son necesariamente contradictorias, las acciones destructivas no impidieron la realización de las votaciones, aunque temporal y propagandísticamente se las unió.

De todos modos, la Fuerza Armada llevó a cabo su plan militar, el cual no era necesariamente una derivación de fuerzas, recursos y objetivos hacia algo ajeno a la misma guerra, dado que el objetivo fundamental era el mismo, no sólo porque la consumación del proceso democrático es una de las legitimaciones más fuertes de la

Cuadro I
Votos válidos en urnas no municipales por departamentos
6 de mayo de 1984

Departamento	ARENA	PDC	Total	% de totales no municipales
San Salvador	22,410 (42.49%)	30,328 (57.51%)	52,738 (100%)	(38.28%)
Santa Ana	4,343 (46.09%)	5,080 (53.91%)	9,423 (100%)	(6.84%)
San Miguel	4,540 (46.77%)	5,166 (53.23%)	9,706 (100%)	(7.04%)
La Libertad	10,226 (47.23%)	11,424 (52.77%)	21,650 (100%)	(15.71%)
* Usulután	1,689 (52.96%)	1,500 (47.04%)	3,189 (100%)	(2.31%)
Sonsonate	5,336 (45.48%)	6,397 (54.52%)	11,733 (100%)	(8.52%)
La Unión	2,117 (40.33%)	3,132 (59.67%)	5,249 (100%)	(3.81%)
La Paz	1,730 (42.35%)	2,355 (57.65%)	4,085 (100%)	(2.96%)
* Chalatenango	1,694 (55.12%)	1,379 (44.88%)	3,073 (100%)	(2.23%)
* Cuscatlán	2,527 (60.09%)	1,678 (39.91%)	4,205 (100%)	(3.05%)
* Ahuachapán	1,709 (54.99%)	1,399 (45.01%)	3,108 (100%)	(2.26%)
* Morazán	3,238 (66.98%)	1,596 (33.02%)	4,834 (100%)	(3.51%)
* San Vicente	1,321 (50.09%)	1,316 (49.91%)	2,637 (100%)	(1.91%)
* Cabañas	1,380 (64.70%)	753 (35.30%)	2,133 (100%)	(1.55%)
Totales:	64,260 (46.64%)	73,503 (53.35%)	137,763 (100%)	(100%)

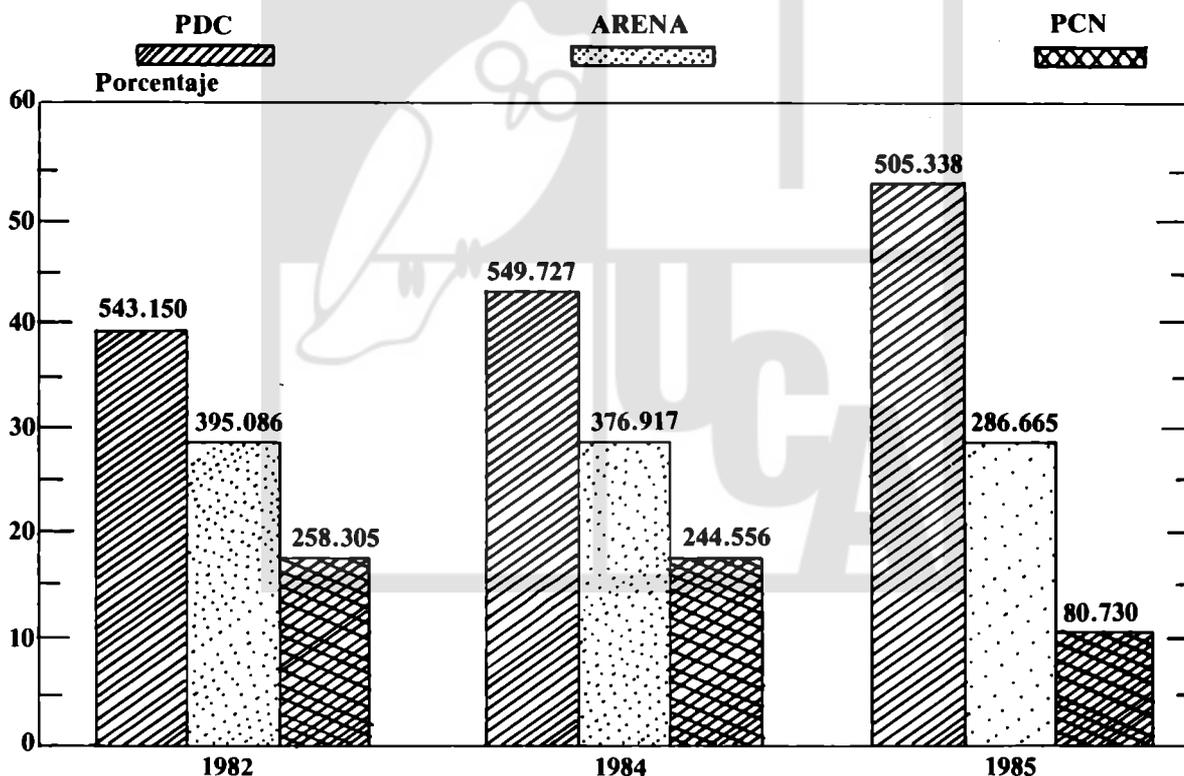
Fuente: Resultados provisionales del CCE, por urnas, 14 de mayo de 1984.

Cuadro II
Votos en 1984 y 1985

Partido	25 de marzo 1984		31 de marzo 1985		Cambio absoluto	Cambio relativo
	N	%	N	%		
PDC	549.727	43.41	505.338	52.35	— 8.07	+ 8.94
ARENA	376.917	29.76	286.665	29.69	— 23.94	— 0.07
PCN	244.556	19.31	80.730	8.36	— 66.99	— 10.95
AD	43.929	3.46	35.565	3.68	— 19.04	+ 0.22
PPS	24.395	1.92	16.344	1.69	— 33.00	— 0.23
PAISA	15.430	1.21	36.101	3.74	+ 133.97	+ 2.53
MERECEN	6.645	0.52	689	0.07	— 89.63	— 0.45
POP	4.677	0.36	836	0.08	— 82.23	— 0.28
PAR	—	—	2.963	0.30	—	—
TOTAL	1.266.276	100.00	965.231	100.00	— 23.77	—

Fuente: datos del CCE.

Gráfico I
Votos en 1982, 1984 y 1985
(en porcentajes de votos válidos)



Fuente: datos del CCE.

guerra, sino también porque esta operación específica pretendía una supremacía militar sobre la guerrilla en todos los frentes y no una simple contención. Es decir, tácticamente se la puede considerar como una desviación temporal de energías militares para dar cobertura a un proceso político, pero estratégicamente corresponde a todo un proyecto en el cual la guerra es nuclear. Por otro lado, el progresivo profesionalismo de la institución armada, su dedicación al operativo para proteger las elecciones, la remoción de ciertos comandantes más politizados, garantizaron una sustancial neutralidad de la institución; gracias a ello la voluntad popular se pudo expresar más auténticamente.

Los resultados de la votación

La votación del 31 de marzo de 1985 merece ser analizada cuidadosamente, por haber arrojado datos nuevos, algunos de ellos inesperados. Primero conviene explicar la disminución de votantes, y luego los resultados obtenidos por los diferentes partidos políticos.

Los votos válidos emitidos esta vez fueron inferiores en un 23.77 por ciento (Cuadro II) a los de marzo de 1984. La explicación de este hecho es, sin duda, compleja. Puede haber influido en ello el que el régimen salvadoreño sea de carácter presidencialista, por lo que las elecciones para diputados y alcaldes suelen tener una votación más reducida, la menor trascendencia que las mayorías atribuyen a esos cargos. La misma campaña y la forma como fue conducida, no motivaron mayormente a ir a votar; algunos se mostraban aburridos; las concentraciones y mítines fueron escasos y poco concurridos, a excepción del último del PDC en el parque Libertad de San Salvador. La repetición tan continuada de elecciones, junto con la percepción de que por ese camino no se solucionan los problemas fundamentales del país ni los personales, posiblemente ha causado hastío y frustración en gran parte del electorado. El tener que votar en el municipio donde están inscritos también restó votos en una cantidad significativa: de los 137.763 votos depositados en urnas no municipales en mayo de 1984 (Cuadro I), muchos se vieron imposibilitados de votar, representando un porcentaje elevado. En fin, el mismo hecho de que coincidiera con una fiesta especial, domingo de ramos, probablemente incidió en que parte de la población prefiriera acudir a la liturgia reli-

giosa —se veía en las filas de votantes personas que llevaban en sus manos ramos ya bendecidos—, o que algunas personas ya hubieran iniciado sus vacaciones en playas o en el extranjero. Probablemente todos esos factores se conjugaron de una u otra forma para disminuir el número de votantes, que sólo alcanzaron al 43.26 por ciento de las papeletas disponibles y al 41 por ciento de los posibles (1.107.471 votos emitidos, contando nulos, etc., frente a 2.560.000 papeletas y 2.700.000 posibles votantes). Ahora bien, si se suman todos los votos no válidos (abstenciones, nulos, impugnados y faltantes), la cifra representa el 12.84 por ciento de todos los emitidos, y un 14.74 por ciento respecto a los válidos; valores no demasiado altos, pero que hacen bajar a poco más del 30 por ciento los votos válidos respecto a las papeletas disponibles, una de las tasas menores en el país. Es difícil interpretar a qué tendencias responden los votos no válidos, si bien no representan una proporción decisiva en la política nacional.

La distribución de votos por partidos ha sorprendido a todos los analistas, incluidos los mismos dirigentes del PDC, quienes esperaban menos de 30 diputados, aunque algunos miembros del partido más optimistas se atrevían a pronosticar hasta 31. Sin embargo, la democracia cristiana no sólo obtuvo una mayoría de votos y de diputados, así como de alcaldes, sino que en nueve de los catorce departamentos del país logró mayoría absoluta de votos (Cuadro III). Si se comparan los votos del 25 de marzo de 1984, con los de este año (Cuadro II), todos los partidos, con la única excepción de PAISA, han disminuido en cantidad absoluta, explicable por la disminución global de votantes; pero tomando en cuenta los valores relativos, o porcentuales, el gran ganador ha sido el PDC, así como PAISA, en mayor proporción dentro de su reducida clientela política. El gran perdedor fue el PCN, quedando los demás con infimas variaciones y relegando a algunos de ellos a un significado irrelevante.

El Gráfico I ayuda a entender la relación entre los tres partidos mayoritarios y entre éstos y el electorado. Dicho gráfico nos indica que ARENA mantiene un mismo porcentaje de votos en las tres votaciones consideradas, y que el crecimiento del PDC es correlativo al decremento del PCN. Sin embargo, el leve crecimiento del primero en 1984 respecto a 1982 no se le puede atribuir a un trasvase de votos pecenistas, ya

CUADRO III
Consejo Central de Elecciones
Resultados provisionales por departamento/partidos (elección de diputados)

	PDC	ARENA	PCN	PAISA	PPS	AD	POP	ME-RE-CEM	PAR	Total válidos	Abs-ten-ciones	Nu-los	Im-pug-nados	Fal-tan-tes	No uti-liza-dos	Total general
San Salvador	148985	70650	11404	11334	3493	12896	0	0	2963	261725	8626	18081	701	3275	360592	653000
Santa Ana	58958	33093	11330	2514	1809	4167	486	210	0	112567	6546	8571	617	300	129899	258500
San Miguel	32339	13288	6573	1120	1249	1705	0	0	0	56274	3228	3829	330	549	118290	182500
La Libertad	54901	33490	7162	2672	1665	3978	0	0	0	103868	7704	9290	512	268	131358	253000
Usulután	28761	15016	5988	3867	1205	2144	0	0	0	56981	3805	4754	475	234	123251	189500
Sonsonate	42312	31704	4084	1716	2575	2329	154	110	0	84984	5356	5872	384	157	88247	185000
La Unión	17959	4932	5332	1517	466	708	24	38	0	30976	2103	2514	165	121	86621	122500
La Paz	25237	17418	6082	2515	1115	2051	89	88	0	54595	4082	3938	378	132	74375	137500
Chalatenango	22903	11169	4235	1282	225	636	0	0	0	40450	3358	3812	294	78	58508	106500
Cuscatlán	13823	15588	4193	2125	652	1605	0	0	0	37986	3155	3227	167	90	62875	107500
Ahuachapán	24104	17471	5757	1946	641	1781	0	0	0	51700	4287	3956	186	99	61772	122000
Morazán	10061	4759	1924	504	674	527	0	0	0	18449	1321	1784	133	32	49281	71000
San Vicente	15357	9313	2480	1117	423	694	0	0	0	29384	2205	2065	144	43	57659	91500
Cabañas	9638	8774	4186	1872	152	544	83	243	0	25292	1914	2314	192	488	49800	80000
Total país	505338	286665	80730	36101	16344	35565	836	689	2963	965231	57690	74007	4678	5866	1452528	2560000
% del total	52.35%	29.69%	8.36%	3.74%	3.68%	3.68%	.08%	.07%	.30%							
% tabulado	92.41%															

Porcentaje de votos válidos: por departamentos y partidos

											% sobre total válido	
San Salvador	59.92%	26.99%	4.36%	4.33%	1.33%	4.93%	0.0	0.0	1.13	100%		27.11%
Santa Ana	52.37	29.40	10.06	2.23	1.61	3.70	0.43	0.19	0.0	100		11.66
San Miguel	57.47	23.61	11.68	1.99	2.22	3.03	0.0	0.0	0.0	100		5.83
La Libertad	52.86	32.24	6.89	2.57	1.60	3.83	0.0	0.0	0.0	100		10.76
Usulután	50.47	26.35	10.51	6.79	2.11	3.76	0.0	0.0	0.0	100		5.90
Sonsonate	49.79	37.30	4.80	2.02	3.03	2.74	0.18	0.13	0.0	100		8.80
La Unión	57.98	15.92	17.21	4.90	1.50	2.28	0.08	0.12	0.0	100		3.21
La Paz	46.23	31.90	11.14	4.61	2.04	3.76	0.16	0.16	0.0	100		5.66
Chalatenango	56.62	27.61	10.47	3.17	0.56	1.57	0.0	0.0	0.0	100		4.19
Cuscatlán	36.39	41.04	11.04	5.59	1.72	4.22	0.0	0.0	0.0	100		3.93
Ahuachapán	46.62	33.79	11.13	3.76	1.24	3.44	0.0	0.0	0.0	100		5.36
Morazán	54.53	25.79	10.43	2.73	3.65	2.86	0.0	0.0	0.0	100		1.91
San Vicente	52.26	31.69	8.44	3.80	1.44	2.36	0.0	0.0	0.0	100		3.04
Cabañas	38.11	34.69	16.55	7.40	0.60	1.36	0.33	0.96	0.0	100		2.62
Total	52.35%	29.69%	8.36%	3.74%	3.68%	3.68%	0.08%	0.07%	0.30%	100%		100%

que este partido conserva el mismo porcentaje, mientras que en 1985 el crecimiento del PDC sí se puede atribuir a la disminución de seguidores del PCN, sobre todo si analizamos el Cuadro II. Este explicaría cómo la disminución porcentual del PCN se refleja en los incrementos del PDC y de PAISA, éste último, además, habría atraído otros votos de partidos menores con decrecimiento, aunque algunos de ellos también habrían podido ir al PDC. Un último elemento que puede ayudar a entender los resultados es que si bien el crecimiento del PDC es notable respecto a las otras votaciones consideradas hasta aquí, no lo es respecto a la del 6 de mayo de 1984, en las cuales obtuvo el 53.59 por ciento (cfr. *ECA*, 1984, 426-427, 366); se puede objetar que aquéllas fueron presidenciales y que en la segunda ronda, únicamente participaron ARENA y PDC, pero la polarización continuada, así como el hecho, la imagen y la propaganda de la "coalición," pueden haber generado en el pueblo percepciones y expectativas similares a las de mayo de 1984, con resultados muy parecidos.

Ahora bien, la simple elucubración y malabarismo de los números no explica adecuadamente los hechos, por lo cual hay que tratar de interpretar los datos y las realidades sociales que están detrás de ellos.

El triunfo del PDC, inesperado para sus

mismos dirigentes, es ciertamente relativo, tanto en porcentajes —no respecto a mayo de 1984, como ya se ha indicado— como en cuanto a número de diputados (33) y alcaldes (158 de 261), no así en número de votantes, si bien la disminución se debe a un fenómeno global que afecta en menor grado a este partido (8.4 por ciento frente a un 23.77 por ciento para la totalidad de los partidos, comparando las cifras del Cuadro II). La explicación de este hecho también ha de ser compleja, por lo que las distintas justificaciones que se puedan dar son más bien "racionales" que empíricas, al carecer de datos derivados de una investigación pertinente. El PDC montó una intensa y saturante campaña centrada en la imagen y figura del presidente Duarte. Si bien él no era candidato, ni las elecciones eran presidenciales, con todo, el efecto en la población era de apoyo o de repudio a Duarte, quien necesitaba una mayoría para realizar un gobierno favorable al pueblo. Por más que se refutase la acusación de la oposición, en el sentido de que el PDC se había convertido en el partido oficial, esa misma acusación puede haber producido un efecto contrario: el de trasladar a la democracia cristiana una clientela "oficialista," que tradicionalmente votaba por el PCN, y hoy por el PDC; así como otro grupo de votos que siempre van al "ganador," o de votos "útiles" y de "rechazo," que buscan impedir que gane la derecha; a esto



El gobierno demócrata cristiano ya no podrá alegar que tiene obstáculos insalvables para realizar sus planes, sino que al fin tendrá que elaborar el plan de gobierno del cual hasta ahora ha carecido el Estado.

puede haber coadyuvado el mismo pacto o coalición de ARENA-PCN (y PAISA en la capital). El pacto pudo defraudar a pecenistas seguidores de la nueva línea predicada por el partido. Si bien el diálogo no fue utilizado como bandera política, a modo de referéndum que volcara una inmensa mayoría a favor del PDC, sin embargo, este partido, y su máximo dirigente, son los únicos que lo han propiciado, realizado y utilizado veladamente como propaganda, e incluso en las postrimerías, tanto Duarte como Rey Prendes declararon que se continuaría el diálogo después de las elecciones, cualquiera que fuere el resultado. Este hecho puede haber incidido bastante para que un buen número de personas optaran por el PDC con la esperanza de que el diálogo y la paz sean una realidad y una solución pronta a los graves problemas del país. En un sondeo de opinión realizado en vísperas de las elecciones, el 63 por ciento opinaba que el diálogo era el camino para encontrar la paz, el 64 por ciento juzgaba que debía continuarse, mientras que apenas el 30 por ciento creía que las elecciones solucionarían los problemas actuales. En otro orden de cosas, durante la semana santa afloró el deseo de paz y diálogo como un sentimiento profundo y anhelado, así se vio reflejado en la cantidad de alfombras, adornadas con tales motivos, por distintos puntos del territorio nacional.

El fracaso de ARENA también debe ser analizado críticamente. En primer lugar, su porcentaje relativo no se ha visto afectado: en 1982 obtuvo el 29.29 por ciento de los votos válidos (ECA, 1982, 402, 324), valor que se mantiene en las sucesivas elecciones con un ínfimo decremento (Cuadro II), cuando participa como partido junto con todos los demás. Sin embargo, de los 19 diputados que obtuvo en 1982, con un porcentaje equivalente de votos, ahora únicamente ha logrado 13, si bien es cierto que de ir solo una buena parte de los del PCN podrían haber sido suyos. El mayor fracaso, con todo, parece haber estado en la dirección de la campaña, la hegemonía de la derecha, la falta de experiencia política en la conducción de la coalición y en la correspondiente ubicación de candidatos y, sobre todo, la pérdida del control legislativo en unión con los demás partidos próximos a su ideología o praxis política. No es extraño, por tanto, que se esté hablando de crisis interna y de la posible escisión de un ala para formar otro partido político.

El PCN fue el gran perdedor, si se considera

la base social que lo ha apoyado, disminuida en 10.95 por ciento (Cuadro II). La carencia de base económica que lo respalde y que lo forzó a una coalición; el deterioro de sus bases sociales, cuadros y estructuras, derivado del proceso que ha vivido el país desde 1979; el retiro del apoyo militar o paramilitar de otros tiempos; son los factores más importantes que pueden haber incidido. Indudablemente, PAISA le ha restado votos —y más que en 1984—, pero no los suficientes para justificar el decremento, ya que el aumento de éste no es correlativo, y en todos los departamentos el PCN ha superado a este partido (Cuadro III). Las razones de mayor peso, por consiguiente, hay que buscarlas tanto en las primeras indicadas, como en el hecho de que algunos de sus seguidores no quedaron conformes con la coalición, el PCN apareció durante la campaña sin imagen nueva ni dirigente alguno, a diferencia de los demás partidos, y contra uno de los mecanismos de identificación populares; pero, sobre todo, en el hecho de que muchos de sus seguidores posiblemente compongan una parte muy considerable del voto "oficialista." Estos votantes con gran facilidad optan por el partido gobernante de turno, por inercia o en espera de alguna oportunidad. Tampoco es de extrañar que en el PCN se haya suscitado una profunda crisis interna, como se verá más adelante. Sin embargo, el PCN ha sido a la vez el gran ganador en las negociaciones políticas, las cuales le produjeron con tan escaso número de votantes 12 diputados y un sustancioso número de alcaldías, cuando en 1982 sólo obtuvo 14 diputados con casi dos veces y media más de votos porcentuales. El mejor conocimiento del electorado y su habilidad negociadora le permitieron ubicar a sus candidatos en posiciones de alta probabilidad electiva.

Lo que sí han demostrado las presentes elecciones es que para obtener votos hace falta tener una estructura movilizadora, ya sea económica, ya sea social, y que no basta con la campaña propagandística si se carece de cuadros y bases organizadas. ARENA contaba con esa estructura, pero parece haber confiado en sus propias fuerzas y en el aporte que le podía prestar el PCN, el cual se ha visto no era tan grande. El PDC, por su parte, ha utilizado todos los recursos a su alcance, incluidos los que surgen de la detención del poder ejecutivo, inferiores a los atribuidos por la oposición, y se ha dedicado casi a tiempo completo a la conformación de las

El gran ganador de las elecciones ha sido el PDC por el respaldo del ejército salvadoreño y de la administración Reagan.

estructuras y bases indispensables para ganar votos. A juzgar por los resultados, lo ha hecho bien y ha conseguido el fruto natural, superior al esperado; no así en la administración gubernamental, donde difícilmente puede mostrar éxito alguno. La polarización preexistente entre ARENA y PDC se ha decantado de momento a favor del último, quien deberá consolidar su posición en estos tres años sin elecciones si es que pretende conservar el poder que le ha caído en sus manos.

Los incidentes postelectorales

Los resultados electorales del 31 de marzo tomaron por sorpresa, más que al propio PDC que se beneficiaba de ellos, a la coalición ARENA-PCN, la cual no esperaba semejante relación de votos, viendo así desarticulado su proyecto de control legislativo por más que lograra unir a todos los no pedecistas. Inmediatamente interpuso un recurso de nulidad de las elecciones, alegando irregularidades que en ningún caso tenían suficiente justificación, e incluso eran de menor cuantía que las que en las elecciones de 1984 les achacara el PDC. Confiados en el apoyo de fuerzas que en otras oportunidades les habían impulsado y sustentado, pretendieron crear un vacío de poder, que pudiera ser llenado, quizás, por un golpe de Estado o por una desestabilización. Pero otros vientos soplaban ahora sobre El Salvador.

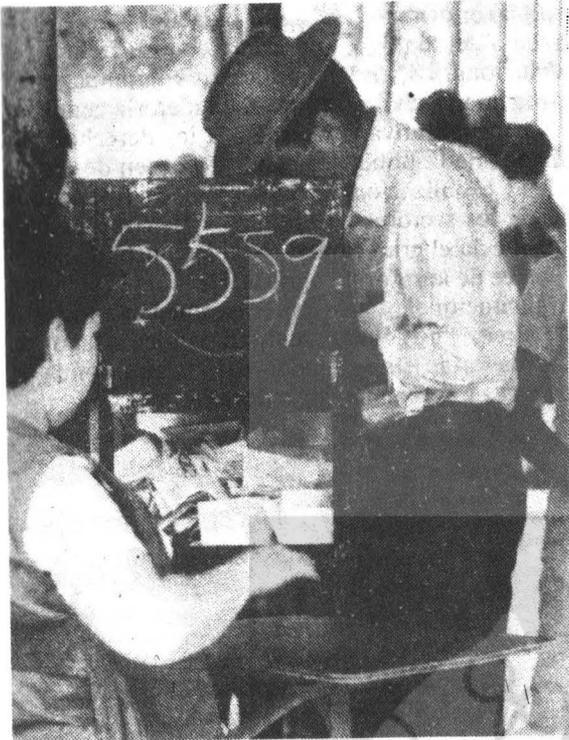
Una fracción importante de la dirección del PCN, identificada y gestora de la nueva línea aperturista, denunció la arbitrariedad del secretario general, Raúl Molina Martínez, al haber firmado el recurso de nulidad sin consulta o decisión de la directiva o de la asamblea general, y desautorizó su actuación, recordando que el pacto era para las elecciones pero que, pasadas éstas, el partido retomaba su libertad de acción. Se tambaleaba, por tanto, la seguridad de lograr la anulación, en el entendido de que dos de los tres votos del consejo Central de Elecciones estaban asegurados. Más aún, la directiva del PCN convocó inmediatamente a una asamblea general del partido, en la cual fueron relevados de sus cargos el secretario general y algunos de sus más afines, logrando el control los miembros de la nueva línea, quienes afirmaron su posición independiente y aperturista para revitalizar el partido.

Pero el momento decisivo ocurrió cuando el alto mando militar, acompañado de todos los comandantes de las unidades mayores del ejército y de los cuerpos de seguridad se presentó ante los medios de comunicación del país. El mensaje dirigido por el ministro de defensa y seguridad pública no dejaba lugar a dudas: la institución armada había cumplido con su misión, no sólo de ser neutral en el proceso electoral, sino de dar protección o cobertura de seguridad y garantía, por medio de la "operación libertad," la cual le había costado 79 muertos, más de 200 heridos y 6 desaparecidos; el país y la Fuerza Armada no estaban para repetir elecciones por pequeñas irregularidades no probadas, o por caprichos partidistas, con el consiguiente costo en vidas y destrucción. La Fuerza Armada dijo estar dispuesta a volver a cumplir, si era necesaria una nueva elección; más bien hay que unir esfuerzos de todos los salvadoreños y de sus representantes para luchar contra el verdadero enemigo común: la subversión y el comunismo internacional que amenazan la seguridad de la patria.

Nunca en El Salvador —ni siquiera el 15 de octubre de 1979— la Fuerza Armada se había presentado ante la nación con tanta concurrencia y solemnidad, en bloque aparentemente monolítico. Aunque el ministro fue el único que habló, todos los demás jefes estaban respaldándolo con su presencia. Los rostros impávidos e impenetrables no permitían deducir actitudes de asentimiento o de disgusto. ¿Se trataba de unidad de criterio consensual? ¿De acuerdo mayoritario aceptado por todos disciplinariamente? ¿Respondía más bien a una presión sutil o manifiesta de la embajada norteamericana? En cualquier caso el mensaje fue claro, tanto para el público como para los partidos denunciantes. Los cuales vieron derrumbarse el último baluarte que siempre los había respaldado y en el que esperaban confiar para lograr sus objetivos. La Fuerza Armada ya no estaba alineada primordialmente con la derecha, sino con el proyecto demócrata cristiano y norteamericano, subordinando los intereses de fuerzas sociales al objetivo fundamental de ganar la guerra contra el FMLN. La derecha perdió así una nueva batalla por reconstruir su hegemonía y ahora tendrá que reelaborar su estrategia con las nuevas leyes del juego.

Inmediatamente el CCE rechazó, por unani-

El gobierno de Estados Unidos ha demostrado suficiente capacidad de maniobra para adaptarse a cualquier correlación de fuerzas políticas porque paga y dirige la guerra.



midad, el recurso de nulidad y se dedicó al escrutinio oficial de votos. El escrutinio fue lento por las continuas reclamaciones y discusiones, aquello más parecían una huelga de celo que un escrutinio. De hecho, los diputados y alcaldes recibieron sus credenciales y tomaron posesión el primero de mayo, sin que en esa fecha —ni en los días posteriores— se tuvieran resultados oficiales publicados, indicio, tal vez, de una solución de compromiso político y no de la consumación del escrutinio.

Las declaraciones del presidente Duarte, tanto antes como después de las elecciones, pidiendo la unidad de todos los salvadoreños y de todos los partidos, por encima de rivalidades secundarias, para reconstruir el país y obtener la paz, fueron otro elemento para reforzar el esquema. El presidente ofreció apertura y colaboración a todos los hombres honestos y capaces. Con ello pretendió no sólo unificar fuerzas para lograr la victoria sobre el enemigo común, sino también consolidar su gobierno y capitalizar recursos humanos y políticos en beneficio de su proyecto. Sin embargo, la oferta de continuación

del diálogo con la izquierda, al cual se oponen muchas de las fuerzas a las que se pretende neutralizar o atraer, pudiera ser un obstáculo en la reconstrucción de la “unidad nacional.”

Análisis complejo y provisorio

Las elecciones del 31 de marzo de 1985, en principio tenían una importancia secundaria, si no irrelevante. El desarrollo de los hechos y todas las circunstancias que los rodearon, sin embargo, las elevaron a un nivel superior al que se les atribuía al principio. En ellas no se ponían en juego puestos políticos de mayor o menor poder. La disminución del número de votantes parece confirmar la menor importancia que el pueblo le reconoció a este acto. Sin embargo, la polarización existente en el país entre las fuerzas sociopolíticas que están representadas en los partidos, así como los resultados que modificaron la correlación de fuerzas en las instancias de poder puestas a votación, movilizaron recursos y estrategias para impedir —o salvaguardar— la readecuación de fuerzas políticas, originando graves crisis a nivel nacional y al interior de los mismos partidos políticos. Todavía tiene que pasar un tiempo suficiente como para que se apacigüen los ánimos, se calmen las aguas y se esclarezca el panorama político, o se definan las estrategias y tácticas que se utilizarán en los próximos tres años de “paz electoral.”

De toda esta contienda, en definitiva, quien más salió robustecido fue el PDC y Duarte, no tanto por el incremento de diputados y alcaldías bajo su dirección y control, sino por el alineamiento y respaldo al proceso, a su gobierno y a su persona, brindado por la institución armada. Esto también refleja claramente la opción preferencial de la administración Reagan por el curso normal del proceso democrático conducido por Duarte. La señal enviada por esas dos fuerzas decisorias en la realidad salvadoreña presente, no sólo constituyen un sostén poderoso para el régimen, sino que fuerzan a los partidos de oposición a conducir su política dentro de cauces democráticos, mientras no se produzcan cambios de importancia en el acontecimiento nacional.

La reestructuración interna del PCN, por otro lado, facilita la consolidación de un “centro democrático” —que parece ser la alternativa

norteamericana—, aunque todavía falta que se esclarezca la línea ideológica, se dé una sedimentación en dicho partido, se definan los diputados elegidos bajo su emblema, de modo que se pueda prever si el “centro” podrá alcanzar fácilmente la mayoría cualificada (40 diputados) requerida para algunas decisiones importantes.

El gobierno democristiano ya no podrá alegar que tiene obstáculos insalvables para realizar sus planes —excusa en la que se refugió para no impulsar proyectos propios y agresivos—, sino que al fin tendrá que elaborar un plan de gobierno, del cual todavía carece el país. Falta por ver cuán grande sea la cuota de poder que se le asigna a la instancia política, tanto por la fuerza del capital, como por la militar y la cobertura internacional, una vez que la fuerza social que representa el voto mayoritario se ha decantado a su favor. El poder real y la capacidad de acción, son

indudablemente pocos, pero existentes y utilizables. La dimensión de dicho poder, así como la capacidad de maniobra y negociación, serán sometidas a prueba en distintas direcciones y a corto plazo: primero en la continuación y profundización del diálogo, anunciado con los frentes revolucionarios, en la conducción y humanización de la guerra civil así como en la mejoría cuantitativa y cualitativa del respeto a los derechos humanos de la población. En otro orden de cosas, en la canalización de más recursos financieros hacia los sectores necesitados y las cooperativas que hacia el gran capital, o en la consolidación y avance de la reforma agraria, incluida la reforma constitucional. Estos criterios pueden ayudar a esclarecer, no sólo la voluntad política a favor de las mayorías, sino el poder real y la autonomía de que goza el régimen salvadoreño.

